

AMPAÑO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Morelos por los CC. Antonio Francisco y socios, vecinos del pueblo de Cuentepec, contra el Administrador de Rentas de Cuernavaca, por violación de garantías.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito:

El promotor fiscal dice: que este recurso de amparo ha sido promovido por ciento sesenta y cuatro individuos, vecinos del pueblo de Cuentepec de este Distrito, contra el impuesto de exentos de Guardia Nacional que se cobra en el Estado conforme al Reglamento que expidió en 13 de Noviembre de 1873, el Ejecutivo del mismo, en virtud de la autorización que le concedió el artículo 39 del Decreto núm. 70 de la Legislatura, de 26 de Abril de aquel año. Invocan los quejosos el artículo 16 de la Constitución que otorga á los individuos la garantía de no ser molestados en su persona, domicilio, familia, papels y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; y dicen, que esa garantía se viola con el impuesto que reclaman, porque reservada al Congreso de la Union la facultad de expedir los reglamentos de organizacion, armamento y disciplina de la Guardia Nacional, las autoridades del Estado son incompetentes para establecer ese impuesto, y extralimitaron sus facultades al expedir el Decreto reglamento citados.

Efectivamente, pertenece á la organizacion de la Guardia Nacional, el establecimiento de exenciones y contribucion de exentos; y como segun el artículo 117 de la Constitución, solo se entienden reservadas á los Estados las facultades que no esten expresamente concedidas á las autoridades federales, es incontestable la procedencia del amparo solicitado en este recurso, pues la fraccion XIX del artículo 72 del mismo

párrafo federal, establece, que el Congreso de la Union tiene facultad para dar reglamentos con el objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservando á los ciudadanos que la formen, el nombramiento respectivo de Jefes y Oficiales; y á los Estados la facultad de instruirla conforme á la disciplina prescrita por dichos reglamentos. Asi se confirma por la ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia en el juicio de amparo seguido ante este Juzgado por los ciudadanos José Castillo y socios contra el Gefe Político de Yautepec, ejecutoria citada en el escrito de queja, y en la que se declaró: "Que no habiendo el Congreso de la Union reglamentado aun la fraccion XIX del artículo 72 de la Constitución, ninguna otra autoridad ha tenido facultades para subsanar esa omision, expidiendo reglamentos sobre la materia, ni declarando vigentes otras leyes anteriores, porque esto importa una invasion de las atribuciones del poder legislativo federal que por esta circunstancia carecia de fuerza legal la disposicion del Ejecutivo de 5 de Mayo de 1861, declarando la vigencia de la ley de 18 de Julio de 1848, que reglamentó la formacion de las Guardias Nacionales. Que ademas, esta disposicion debe considerarse derogada, como comprendida en la ley de 9 de Mayo de 1861; y que en consecuencia y sin que esto menoscabe la plena facultad que tienen los Estados de la Federacion para atender á su seguridad propia en la órbita que la Constitución les marca; el Gobierno del Estado de Morelos no fué competente para decretar las contribuciones á que se refieren los quejosos."

Es un hecho público y notorio, que la contribucion de exentos de Guardia Nacional, se exige en el Estado á todos los ciudadanos, aun á los empleados federales, y sin que soliciten la exencion ni haya el servicio activo de Guardia Nacional; que la cobranza de esa contribucion, es motivo de vejaciones personales y causa de responsabilidad para las autoridades subalternas de los pueblos,

según el mismo reglamento de 13 de Noviembre, que se deje exigir el pago á los ciudadanos. Por lo que:

El Promotor pide, se declare que la Justicia de la Union ampara y protege á los quejosos, contra el impuesto mencionado, conforme á los artículos 101 y 102 de la Constitución.

Otro sí digo: que debe mandarse reponer con el correspondiente, el papel del sello 59 de que se ha usado en estas actuaciones.

Cuernavaca, Abril 24 de 1874.—*Nicolas Medina.*

Es copia que certifico.—Cuernavaca, Mayo 7 de 1874.—*Mariano Sansalvador.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Cuernavaca, Mayo 2 de 1874.

Visto este juicio de amparo promovido por los ciudadanos Antonio Francisco y socios, vecinos del pueblo de Cuentepec, contra la Administración de Rentas de esta Capital, por el cobro que les hace de la contribucion de exentos del servicio de la Guardia Nacional, con lo que dicen que en sus personas se viola la garantía otorgada en el artículo 19 de la Constitución, y se invade además la órbita de facultades concedidas al Congreso de la Union, á quien por la fracción 19 del artículo 72, solamente toca organizar la mencionada guardia. Vista la ratificación de los quejosos, el informe rendido por la autoridad responsable del acto de que aquellos se quejan, la suspensión decretada de esa cobranza y sus rezagos, lo alegado por el ciudadano Promotor y la citación para sentencia. Resultando: que por el mismo informe de la autoridad ejecutora, consta que á los quejosos no obstante el servicio de veintenas que prestan, se les ha cobrado la contribucion de que se quejan, en virtud de una ley del Estado y el Reglamento dado por el Gobierno en 13 de Noviembre de 73, cuyas disposiciones invaden la esfera federal, porque la regla-

mentacion de la Guardia Nacional es de la exclusiva incumbencia del Congreso de la Union, cuya omision, ninguna otra autoridad puede subsanar: y por el artículo 126 de nuestro Código fundamental, es la Suprema Ley de la Nacion, á la que todas las leyes y autoridades deben respetar, sosteniendo las garantías que ella otorga: siendo una de ellas la del artículo 16 que, con la cobranza del impuesto de exentos de una guardia que no ha existido, ni podido existir en el Estado sin su reglamento dado por el Congreso General, evidentemente se ha violado en las personas de los peticionarios; con apoyo de los artículos 19, 126, 101 y 102 del citado Pacto federal, se declara:

1º Que la Justicia de la Union ampara y protege á los ciudadanos Antonio Francisco, Antonio Salvador, Antonio Pascual, Antonio Salvador, Antonio Sebastian, Antonio Pascual, Antonio Miguel, Antonio Pascual, Antonio Francisco, Antonio Pascual, Antonio Pedro, Antonio Pedro, Andrés José, Antonio Pedro, Antonio José, Antonio Pedro, Antonio Francisco, Antonio Sebastian, Antonio Francisco, Antonio Pedro, Antonio Francisco, Antonio Juan, Antonio Hilario, Antonio Pascual, Antonio Francisco, Antonio Miguel, Antonio Sebastian, Antonio Sebastian, Ascencio Pedro, Antonio Sebastian, Antonio Pascual, Antonio Sebastian, Antonio José, Antonio Miguel, Antonio José, Antonio Francisco, Antonio Sebastian, Antonio Miguel, Antonio José, Antonio José, Antonio Sebastian, Albino José, Antonio José, Ascencio Pedro, Antonio Francisco, Antonio Pedro, Antonio Sebastian, Antonio Roberto, Antonio Francisco, Ambrosio Sebastian, Antonio José, Antonio José, Antonio Salvador, Ascencio José, Antonio Pascual, Antonio Pascual, Antonio José, Antonio Miguel, Antonio Salvador, Antonio Salvador, Antonio Francisco, Antonio Miguel, Antonio Miguel, Antonio Sebastian, Antonio Miguel, Ascencio Pedro, Antonio José, Antonio Francisco, Antonio Pedro, Antonio Francisco, Domingo Pedro, Estra-

2º Hágase saber al Promotor y notifí-

Es cópia que certifico. Cuernavaca, Mayo 7 de 1874.—*Mariano Sansalvador.*

México, Mayo 13 de 1874.

Considerando: Que no habiendo el Congreso de la Union reglamentado aun la fracción 19 del art. 72 de la Constitución, ninguna otra autoridad ha tenido facultades para subsanar esta omisión, expidiendo reglamentos sobre la materia, ni declarando vigentes otras leyes anteriores, porque esto importa una innovacion de las atribuciones del poder Legislativo Federal: Que por esta circunstancia carecia de fuerza legal la disposicion del Ejecutivo, de 5 de Mayo de 1861, declarando la vigencia de la ley de 18 de Julio de 1848, que reglamentó la formacion de las Guardias Nacionales: Que ade-

mas, esta disposición debe considerarse derogada, como comprendida en la ley de 9 de Mayo de 1861: que en consecuencia, y sin que esto menoscabe la plena facultad que tienen los Estados de la Federación para atender á su seguridad propia en la órbita que la Constitución les marca, el Gobierno del Estado de Morelos no fué competente para decretar las contribuciones á que se refieren los quejosos: Que el hecho de haber exigido dichas contribuciones, está plenamente probado.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución, se decreta: Que es de confirmarse y se confirma la sentencia del C. Juez de Distrito de Morelos, y en consecuencia se declara: Que la justicia de la Unión ampara y protege á los CC. Antonio Francisco y demas vecinos del pueblo de Cuentepec que firmaron el escrito en solicitud de este amparo.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—Presidente *Iglesias*.—Ministros. *Garza*.—*Lozano*.—*Ramírez*.—*Castañeda*.—*Altamirano*.—*Guzman*.—*Velasquez*.—*Zavala*.—*Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Noviembre 17 de 1874.—*Aguilar*.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Michoacan por el C. Francisco Paredes, á nombre de su hijo Ignacio del mismo apellido, contra el C. Prefecto de Pátzcuaro, por violacion de garantías.

Pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

Las razones que ha expuesto la parte quejosa en su escrito de alegato, tomándolas de las piezas que en calidad de prueba corren agregadas á los autos, no pueden en concepto del Promotor, fundar la resolución que se pretende, sobre que la Justicia de la Unión lo ampare y proteja.

En efecto, se halla perfectamente acreditado que, no habiendo motivo alguno para continuar contra Paredes el juicio que por el delito de plagio inició el Prefecto de Pátzcuaro, se le consignó al Juzgado de Letras por haber sido acusado de complicidad en el homicidio de Roman Acosta, segun aparece de los autos. Resulta de aquí, que no ha habido en su persona violacion alguna de garantías constitucionales, y que por lo que toca el delito de que se le acusa, se lo está juzgando por la autoridad competente, sin que por lo mismo tenga por ahora lugar el recurso de amparo, segun lo prevenido en el art. 39 de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869.

Si el C. Prefecto ó otra autoridad dejaron pasar los términos prevenidos por la ley, será este un motivo de responsabilidad que deberá exigirse con arreglo á la misma; pero de ninguna manera podrá ser este un motivo del juicio de amparo.

Por lo expuesto, el Promotor reproduce su pedimento de 19 de Noviembre, y pide se resuelva en el sentido que expresa.

Morelia, Enero 14 de 1875.—*N. Caballero*.—Una rúbrica.